



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Mar del Plata, 20 de octubre de 2025

VISTO:

El caso **FMP 3163/2018/9/CA3**, caratulado "Legajo de apelación de Constantino Juan Martín; Constantino, Mariela Soledad; Constantino, Francisco y Rocca, Serafica por infracción artículo 303 del Código Penal", del registro de la Secretaría Penal de esta Cámara Federal de Apelaciones, elevado por el Juzgado Federal 3, Secretaría 6;

Y CONSIDERANDO:

El doctor Eduardo Pablo Jiménez dijo:

Motiva la intervención de esta Alzada el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Francisco Costantino, Juan Martin Costantino y Serafina Rocca, así como por el letrado defensor de Mariela Soledad Costantino, ambos contra el interlocutorio de fecha 02/12/2024 mediante el cual se resolvió -en lo que al presente interesa- dictar el procesamiento sin prisión preventiva de los nombrados por el delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad, en carácter de coautores en el supuesto de Francisco, Juan Martín y Mariela Soledad Costantino y de partícipe necesaria en el caso de Serafina Rocca, trabando embargo sobre los bienes y dinero de los nombrados por la suma de \$2.500.000.000, además de imponerles el deber de no ausentarse por más de 24 horas de esta ciudad sin autorización expresa del juez, a la vez que mantuvo la prohibición de salida del país sin previa autorización judicial dispuesta el 12/12/2023.

Asimismo, se dispuso el embargo con fines de decomiso de los bienes enumerados en el apartado XI del auto apelado y la decisión de comunicar lo resuelto al Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas a cargo del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata (art. 27, segundo párrafo ley 26 .364 y art. 27 ley 25.246).

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

Igualmente, se resolvió mantener la inhibición general de bienes de los recurrentes y decretar la inhibición general de bienes de “Vonio SA”, “Falerna SA”, “Botricello SA”, “Calafalas SA”, “Acquafredda SA” y “Huertas del Sudeste SA” (artículos 23 CP, 305 y 518 del CPPN).

Los hechos.

A los fines de lograr una mejor claridad expositiva, en prieta síntesis diré que en la presente se atribuye a Francisco Costantino, Serafina Rocca, Juan Martin Costantino, Mariela Costantino y Guillermo Vitarelli (no recurrente en esta oportunidad), el hecho de haber introducido y puesto en circulación en el mercado formal fondos de origen espurio provenientes de la comisión de los ilícitos constatados en el marco de las causas FMP 9023/2013 y FMP 25502/2014 que tramitaran ante el Juzgado Federal N° 3 de esta ciudad y que se encuentran en instancias de debate oral y público, hechos vinculadas con los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral cometidos entre los años 2010 y 2015 en los predios rurales ‘Costamari’, ‘La Loma’ y ‘Aníbal’ administrados por el grupo familiar Costantino.

Dicha actividad ilícita —trata de personas con fines de explotación laboral— habría conllevado la obtención de ganancias por parte de los involucrados, precisamente por la explotación agraria de los predios mencionados, que habrían sido introducidas en el mercado legal a través de diversos tipos de operaciones, como compra y venta de rodados, adquisición, administración y transferencia de inmuebles, transferencia y tenencia internacional de divisas y que no encontrarían justificación en los ingresos declarados ni en la actividad económica desarrollada por los investigados en dichos períodos.

Asimismo, consideró la instrucción el hecho constitutivo del delito de evasión tributaria, en tanto los nombrados, encontrándose en trámite las causas 9023/13 y 25502/14 antes referidas, sinceraron bienes adquiridos en el periodo investigado conforme la ley 27.260, que comprendía la regulación de manera excepcional de obligaciones tributarias y aduaneras (art. 46, inc. 4 de la ley).

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

La resolución recurrida.

Para así decidir, el Juez a quo consideró que los elementos probatorios incorporados reflejaban la información recabada sobre los bienes tanto en el país como en el exterior, para lo que se recurrió a rogatorias internacionales, a certificar la situación fiscal declarada de los imputados y a revisar los análisis patrimoniales ordenados en la causa. Igualmente, tuvo presente los descargos por escrito formulados por los imputados.

Así las cosas, a los fines de la acreditación de la hipótesis delictiva, entendió que el caso evidenciaba indicadores de lavado de activos que están previstos en diversos documentos y guías para la investigación del lavado de dinero, y que son fruto de la labor de investigación y sistematización llevada a cabo por organismos internacionales expertos en la materia, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los cuales enumera.

En cuanto al ilícito precedente —elemento característico del tipo penal endilgado—, tuvo presente que tal recaudo surge de los hechos investigados en las causas nro. 9023/2013 y 25502/2014, refiriéndose —de manera detallada— a las ganancias ilícitas que habría generado la trata de personas con fines de explotación laboral en los predios del grupo Costantino, a partir de lo que dejaron de abonar a sus trabajadores (ganancia ilícita obtenida por el tratante en relación con cada víctima) y al fisco (al mantener oculta la relación laboral). En tal sentido, el Dr. Inchausti tuvo en consideración las testimoniales de las víctimas, las remuneraciones que en promedio manifestaron percibir y la que les correspondía de conformidad con los Convenios Colectivos agrarios, conformando una ganancia ilícita aproximada de USD508.825 por el periodo 2010-2015.

Además, sostuvo que aquellos dividendos sobre los que no tributaron en el país, como así también el incumplimiento del pago de las cargas sociales y demás obligaciones del empleador, redundaron en un beneficio económico ilegítimo hasta su



sinceramiento al amparo de la ley 27.260 y que esos activos, que deberían dejar de ser propiedad del contribuyente al momento de consolidarse el hecho imponible y generarse la obligación fiscal, habrían sido transformados, total o parcialmente, en los bienes posteriormente sometidos al sinceramiento fiscal, proceso que dejó atrás cualquier irregularidad en el plano fiscal y culminó en una conversión que le otorgó una apariencia legítima a dichos bienes.

Igualmente, entendió que en virtud de lo expuesto en los arts. 54 y 84 de dicha ley y en atención a las causas 9023/2013 y 25502/2014 que dieran origen a la presente en miras a investigar el incremento patrimonial por el uso de ganancias espurias (de los allí procesados por el delito de trata de personas y sus allegados), ello impide su adhesión al régimen establecido por la referida Ley, ya que el régimen de sinceramiento fiscal fue dictado con la especial aclaración de que aquel no fuera utilizado para el perfeccionamiento de maniobras de lavado de activos, sin perjuicio de que fuera vista por la familia Costantino como una oportunidad para regularizar los fondos obtenidos de manera ilícita, sentenció el a quo.

Así las cosas, luego de analizar las reglas trazadas por la casación penal en torno al estándar probatorio en esta clase de delitos y analizar, en particular, la situación patrimonial de cada uno de los encausados y las diversas maniobras de lavado investigadas (inmuebles ocultos hasta marzo de 2017 y posteriores al blanqueo, considerado por el a quo como compresivos de la etapa de “integración”, los inmuebles declarados, los vehículos y las cuentas bancarias en el exterior), entendió que se había producido una confusión entre los patrimonios de origen lícito e ilícito, integrados por los imputados al circuito económico de formas que aparentaron ser legales, dificultando su rastreo y la identificación de su origen. Así, al mezclar los recursos provenientes de la explotación laboral con otros activos legítimos, incurrieron en la conducta típica de lavado de activos, vulnerando el orden económico y favoreciendo la impunidad de los delitos previos, lo que motivó, en definitiva, el dictado del auto de procesamiento atacado.

Los agravios de las partes recurrentes.

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

En primer término, la defensa técnica Francisco Costantino, Juan Martín Costantino y Serafina Rocca se agravia por cuanto considera que la resolución impugnada constituye un claro supuesto de arbitrariedad de sentencia por su absurda valoración probatoria, por la falta de una descripción precisa y circunstanciada de los hechos que se imputan y por la inexacta subsunción legal de los delitos que imputa a sus defendidos, siendo que los hechos investigados resultaban atípicos.

También sostiene que se incurre en una presunción ilegítima del dolo que viola el principio constitucional de culpabilidad y que se imputa a sus defendidos una intervención en calidad de coautores, sin demostrar ni motivar con sustento probatorio el supuesto acuerdo previo, la distribución de funciones y ni tampoco el supuesto co-dominio funcional del hecho.

Por otro lado, sostiene que se impone como medidas cautelares cauciones personales de un monto desproporcionado y exorbitante, que además se acumulan entre sí.

Finalmente, reclama que vulnera la garantía constitucional de la ley penal más benigna, al considerar que debe descartarse el delito de lavado de activos mediante la administración de los bienes inmuebles ya que no es punible, resultando también de aplicación a la “administración” de cada uno de los inmuebles, la cual habría comenzado —a su entender— durante la vigencia de la ley 25.246 (art. 278 CP).

Por su parte, la defensa técnica de Mariela Soledad Costantino reclama que la habitualidad como circunstancia agravante nunca fue objeto de intimación, que no estaba incluida en la indagatoria y de la cual no se defendió, por lo cual la resolución es nula en ese sentido por violar el art. 307 del CPPN y el derecho de defensa en juicio (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 8 de la CADH).

Asimismo, sostiene que se viola el principio de ley penal más benigna al calificar como violación al art. 303 del CP, aquellos hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia y a partir de una valoración incorrecta y arbitraria de la prueba.

Por último, se agravia de la prohibición de ausentarse por más de 24 horas de esta

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

ciudad, afectando arbitrariamente la libertad ambulatoria y en cuanto al embargo dispuesto, no guarda relación con los hechos juzgados ni con su capacidad económica.

La réplica formulada por el Ministerio Público Fiscal.

Al contestar los agravios de la defensa, el Fiscal General sostuvo que el análisis conglobado de la evidencia colectada da cuenta que la decisión atacada se encuentra razonablemente fundada, por lo que corresponde su confirmación.

Explica que la discusión gira en torno a determinar si los bienes fueron obtenidos como consecuencia de las maniobras por las cuales resultaron procesados en aquellas causas Francisco, Juan Martín y Mariela Costantino y que de la lectura de las actuaciones se puede afirmar que existen elementos suficientes para resolver en ese sentido, lo que justificaría el incremento patrimonial del que resultaron beneficiados. Para ello, además, intentaron valerse del acogimiento a una norma que expresamente excluía dicha posibilidad para la situación procesal en la que se encontraban al momento de acogerse y para la conducta por la cual se encuentran actualmente procesados (en referencia a la ley 27.260).

En tal sentido, sostiene que en el caso no se observa la existencia de una fuente legal de ingresos que pueda justificar el capital que ostenta el grupo familiar Costantino, particularmente en cuanto a los bienes adquiridos tanto en esta ciudad como en los Estados Unidos, entre los años 2010 y 2015 (fijado en el marco de los casos 9213/2014 y 25502/2014) y los consecutivos.

El patrimonio de la familia Costantino creció exponencialmente a partir del año 2010, lo que se tradujo en la adquisición de cuatro inmuebles en Miami (EEUU), al menos siete inmuebles en el país y al menos trece rodados, viajes al exterior, fondos en bancos extranjeros y compra de moneda extranjera, con la especial particularidad que las declaraciones de ingresos en esos períodos se mantuvieron por debajo de estas aplicaciones.

Tal es la falta de ingresos declarados que permitan justificar la adquisición de los bienes materia de imputación, que fueron los propios imputados quienes intentaron,

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

respecto a algunos inmuebles y un vehículo, acogerse a la ley 27.260, a los efectos dotar de legalidad a una serie de bienes cuya adquisición no podían justificar en función de las declaraciones juradas presentadas por los mismos ante el organismo fiscal entre los años 2010 y 2015.

Sostiene que el juez ha diferenciado correctamente entre aquellos bienes que no fueron declarados hasta su acogimiento a la ley 27.260 de aquellos que sí lo fueron aunque, sin embargo, la adquisición, administración, conversión y/o puesta en circulación en el mercado de determinados bienes, no encuentra justificación en la situación fiscal de los imputados que fuera informada por la AFIP en el marco de las declaraciones juradas presentadas oportunamente por ellos. Destaca al respecto, que las fechas de adquisición de los inmuebles en Miami (Estados Unidos) son coincidentes con el período investigado en las causas 9023/2013 y 25502/2014, y la inyección de dinero y posterior administración de los mismos no ha encontrado respaldo fiscal, razón por la cual intentaron ser “blanqueadas” mediante acogimiento a la ley 27.260, buscando una amnistía que su situación procesal les impedía y que, además, tampoco evitaba la persecución por delitos contra el orden económico y financiero. Bajo el amparo de dicha ley, Juan Martín y Francisco Costantino, también manifestaron poseer cuentas bancarias en el exterior, ubicándose en el mismo plano otros inmuebles ubicados en la ciudad y los automóviles adquiridos.

Agrega que el acogimiento de los imputados fue dado por decaído por el organismo fiscal conforme surge de lo informado en fecha 24/11/2024, teniendo en cuenta la exclusión surgida en función de los artículos 84, punto e) N° 2 de la Ley 27.260, 6 de la Ley 25.246, en función del artículo 145 bis del Código Penal. En definitiva, el argumento defensorista que responsabiliza únicamente a Francisco Costantino, cae por su propio peso, y además que Juan Martín y Mariela Constantino comparten la imputación junto con el nombrado en los casos radicados ante el TOF, la situación de haber intentado acogerse a una norma de sinceramiento fiscal da cuenta que los mismos, además de conocer el patrimonio que ostentaban pese a su falta de justificación fiscal, buscaron dotar de legalidad dichas adquisiciones, evitando así el

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

pago de tributos durante varios años y la eventual persecución que su descubrimiento en las fechas de su adquisición hubiese generado de haber sido conocido en el marco de las causas 9024/2013 y 25502/2014.

El mismo temperamento se aplica con relación a los coimputados Serafina Rocca y Guillermo Vitarelli -aunque también ha sido introducido respecto de Mariela Costantino- dado que la relación familiar existente, producto de los vínculos que cada guardan entre sí (tanto a la fecha de adquisición de los bienes como con posterioridad), les impide a esta altura alegar una especie de ignorancia sobre la procedencia de los fondos para la adquisición y posterior administración de los bienes arriba indicados.

Además, observa que en el caso, si bien no se desconoce que los imputados llevaban adelante una actividad comercial lícita, ésta, por sí sola, no permite justificar la gran adquisición de bienes tanto en el país como en el exterior y menos aún, los montos dinerarios volcados en la misma.

En cuanto al agravio vinculado a la violación del principio de congruencia ante la falta de intimación en el marco de la indagatoria del agravante previsto en el artículo 303 inciso 2 a) (habitualidad) entiende que también debe ser rechazado por resultar un agravio meramente formal, por cuanto una lectura de las intimaciones cursadas a los imputados permite observar que el juez efectuó una descripción detallada y precisa de los hechos recriminados. Así, la calificación legal asignada en el auto de procesamiento apelado no importa, de por sí, ninguna variación en la plataforma fáctica reprochada, la que no ha mutado desde el llamado a indagatoria, por lo cual, el imputado no puede verse sorprendido con el encuadre legal efectuado, solicitando se desestime el planteo de nulidad intentado.

En cuanto a la aplicación de la garantía de ley penal más benigna, vinculado a que las operaciones detectadas e imputadas se realizaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.683, también solicitó su rechazo, explicando que si bien dicha circunstancia no escapa al conocimiento de ese Ministerio Fiscal, las defensas omiten que el delito imputado y vinculado con dichas operaciones se enmarca dentro de los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

llamados delitos continuados, resultando aplicable la ley aquella vigente “en el momento en que cesa el estado de antijuricidad”.

Finalmente, en torno a las medidas cautelares, considera que también deberían ser confirmadas, ya que el Magistrado efectuó una adecuada justificación de los motivos que llevaron a fijar dicho monto del embargo, el que resulta adecuado en razón de los hechos investigados, debiendo tenerse en cuenta la naturaleza de los delitos atribuidos, el patrimonio a disposición de los imputados, la posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria y las costas del proceso (arts. 23, 29 y 30 C.P.). Respecto de las demás cautelas dispuestas, también lucen proporcionales y ajustadas a derecho, por cuanto se basan en serios y concretos riesgos que ameritan la adopción de una medida como la dispuesta.

La opinión del suscripto.

Habiendo efectuado un análisis de la cuestión traída a debate, los agravios introducidos por las defensas y la réplica formulada por el Ministerio Público Fiscal, entiendo que el auto cuestionado debe ser confirmado, todo en función de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer.

Ahora bien, en relación de la responsabilidad penal de los encartados, se pudo constatar la carencia de suficientes ingresos lícitos para justificar los bienes que disponen y las operaciones comerciales tendientes a dar apariencia lícita al dinero espurio, así como el vínculo existente con los ilícitos precedentes, todo conforme los parámetros requeridos en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En efecto, la instrucción ha comprobado —con el grado de responsabilidad propio de esta etapa procesal— la existencia del hecho delictuoso y la participación de los encartados en el mismo, habiéndose acreditado también los indicadores del tipo penal en el cual fueron subsumidos los acontecimientos investigados.

De tal modo, se comprobó la existencia del ilícito precedente en función de lo investigado en las causas nro. 9023/2013 y 25502/2014, donde se verificó “prima facie” la existencia de un mecanismo de trata de personas con fines de explotación

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

laboral en los predios rurales “Costamari”, “Quinta Aníbal” o “Quinta La Loma”, dedicados a la producción y comercio de verduras y hortalizas, ilícitos llevados a cabo por la organización criminal compuesta por Francisco, Juan Martín y Mariela Soledad Costantino.

Ahora bien, en este punto, me permito recordar que en el marco del referido Expte. N° 9023/2013 (criterio también seguido en el antecedente “Porco”, Exp. N° FMP 2402/2014/3), consideré que “prima facie” no se evidenciaban indicadores que hicieran presumir la existencia de una conducta que pudiera quedar subsumida en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, sin perjuicio de existir faltas relativas a la relación de trabajo propiamente dicha, de las cuales se ocupa la legislación laboral específica, inclusive aplicando sanciones de carácter administrativo, en el entendimiento que “...El principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal...” (Fallos: 331:858). Sin embargo, al ser revisado el pronunciamiento de este Tribunal por la Cámara Federal de Casación, se desestimó esa postura y ordenó continuar con la investigación, marcando la existencia de patrones que podrían evidenciar la existencia del delito de trata, criterio al que se ajustó el juez de la instancia anterior para resolver el procesamiento y la posterior elevación a juicio.

Efectuada dicha aclaración sobre el criterio del suscripto volcado en esa oportunidad y considerando la resolución adoptada por el Dr. Inchausti sobre el delito precedente en torno a la participación de los encausados en los hechos objeto de investigación, entiendo que la misma se ajusta a las constancias de la causa y a una correcta aplicación del derecho.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

En efecto, habiéndose concluido que -prima facie- existió el delito de trata de personas, pueden tenerse por acreditado -también con la provisoriedad que caracteriza esta etapa procesal- que existieron maniobras que se llevaron adelante para disimular y/u ocultar los fondos provenientes de dicho ilícito.

Debe tenerse presente, a los fines de comprender las maniobras que se vienen detallando, que las acciones de lavado de dinero “...pueden realizarse por acción u omisión. Frente a este delito resulta necesario diferenciar la actividad ilegal primaria —denominada delito precedente o subyacente-, que es la que ha generado los ingresos indebidos...”, en el caso lo que se identificó como trata de personas con fines de explotación laboral, “...de la segunda etapa, que consiste en un negocio que en apariencia es legal, pero que —a raíz de los fondos utilizados- matizará a la operatoria, constituyendo el delito de lavado de dinero...” (Basílico, R.A, “Delitos contra el orden económico y financiero”, Astrea, 2019, pág.35), que es el objeto de investigación del presente.

En dicho norte, entiendo que se ha precisado y descripto la inconsistencia del patrimonio de los encausados, debiendo recordar que la ley penal exige “...que un exista ilícito penal del cual provengan los bienes objeto de lavado, con prescindencia de que su autor haya o no participado en el ilícito penal anterior...” (Basílico, R.A, “Delitos contra el orden económico y financiero”, Astrea, 2019, pág.35, con cita de Donna), por lo cual entiendo que partiendo de la existencia del delito precedente, la hipótesis planteada por el juez instructor resulta acertada y da cuenta de una base fáctica que podría encuadrarse en el delito de lavado de activos.

De igual forma, considero que se encuentra acreditado —siempre en orden a los entandares de la etapa procesal que transita la causa— el nexo entre el objeto del blanqueo ilegal de activos y el delito previo, para lo cual no es necesario un conocimiento exacto y preciso de este último, ni tampoco que se proponga “...ocultar o disimular la procedencia ilícita de los bienes, sino que esa conducta sea potencialmente apta para ello, y que el autor tenga conocimiento de esa procedencia ilegal...”, no



siendo imprescindible que el delito previo resulte acreditado, conforme la doctrina mayoritaria (ver Tazza, Alejandro; “Código Penal de la Nación Argentina Comentado. Parte Especial”, Tº III, Rubinzal-Culzoni, pág. 568).

Ello por cuanto, no se sanciona “...el acto final de ‘lavado’, sino a las operaciones tendientes a legitimar bienes provenientes de un hecho ilícito anterior. No es por lo tanto un delito de resultado, sino de peligro para el bien jurídico tutelado que se ve así comprometido por la maniobras que forman parte de la maniobra tendiente a legitimar dichos activos...” (Tazza, Alejandro; ob.cit., pág. 569).

La jurisprudencia ha forjado este criterio desde hace más de una década, al sostener que “...Se requiere por tanto, la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico, que permita la exclusión de otros orígenes posibles, no siendo necesaria la superación del plano indiciario, ya que la demostración plena de esos vínculos nos conduciría a la valoración de la conducta del presunto autor como una forma de participación en el delito antecedente -circunstancia ajena al delito en cuestión-...” (CNCP, Sala: I, Registro n° 8622.1., autos “Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación”, del 21/03/06).

Bajo tales arbotantes, se encuentra acreditada la materialidad del hecho y la autoría y participación de los encartados, ya que —como se dijo— la figura penal de lavado de activos no exige que, en los casos de multiplicidad de autores, se acredite su participación penal en el delito precedente.

Inclusive, como acertadamente advierte el Fiscal General, los encausados intentaron valerse del acogimiento a los beneficios otorgado por la Ley 27.260, por lo cual el agravio blandido por las defensas al respecto, no puede tener acogida favorable, toda vez que la normativa vigente nada impide al respecto, resultando ajustado a derecho.

En ese sentido se ha dicho que “...en atención a la investigación que se lleva a cabo en la causa principal, y de conformidad con lo que se establece por las leyes 11.683 y 27.260, resulta ajustada a derecho la inclusión en aquellas actuaciones del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

dictamen presentado por el fiscal por el que amplía el requerimiento de instrucción y solicita la ampliación de declaraciones indagatorias y la realización de medidas, que se basa en parte en las declaraciones voluntarias y excepcionales previstas por la ley 27.260 efectuadas por J. J. L. ..." (Incidente de reposición formado en la causa N° CPE 321/2016 caratulada: "Actuaciones preliminares en causa N° CPE 248/2015: Laboratorios ESME y otros S/Inf. art. 303, 304 y evasión simple tributaria" J.N.P.E. N° 6 S. 12. CPE 321/2016/27/14/CA18. Sala "B" N° 28.748 del 13/03/2019).

Todo ello sin perjuicio, conforme advierte el Dr. Adler, que la norma que instauró el régimen de sinceramiento previó que no fuera utilizada para el perfeccionamiento de maniobras de lavado, en efecto, el art. 81 establece que ninguna de las disposiciones del libro II de la ley liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Continuando con el análisis del caso, entiendo que se encuentra acreditado —con el grado de precariedad propio de esta etapa procesal— que las ganancias ilícitas obtenidas del delito precedente habrían sido puestas en circulación a través de la adquisición de diversos bienes (muebles e inmuebles) por parte del denominado "Grupo Costantino", no solo en el país, sino también en el exterior, precisamente en Miami, Florida, Estados Unidos, que no pudieron ser justificados por los encartados a través de alguna fuente legal de ingresos.

En efecto, conforme también destaca el Fiscal General, la instrucción ha logrado constatar que entre los años 2010 y 2015 el patrimonio de esas personas creció exponencialmente, lapso en el que adquirieron cuatro inmuebles en Miami, otros siete en el país, unos trece rodados, además de haber realizado una importante cantidad de viajes al exterior, contando a su vez con cuentas bancarias en el extranjero y compra de divisa extranjera a su vez, lo cual fue comprobado por la instrucción a través del informes de la UIF N° 378/18 y 570/18, cotejado a su vez con la información brindada por los organismos recaudadores nacional (ARCA, ex AFIP) y provincial (ARBA), en

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

relación a las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias de cada uno de los imputados, como así también del informe del BCRA y de las diversas entidades bancarias y financieras, de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y del Registro de la Propiedad Inmueble, entre otros (ver constancias del Sistema LEX100).

Del mismo modo, cobra relevancia el informe de la DAJUDECO (Nro. 9028/2024) de fecha 11 de junio de 2024 donde constaba la evolución patrimonial y flujo de fondos (aplicaciones que superan los orígenes de fondos reconstruidos) de los sujetos investigados y el estudio comparativo de estados contables, donde aparece el blanqueo de bienes —entre ellos los existentes en el exterior—, las operaciones comerciales de bienes registrables en el país y en el extranjero, las operaciones con moneda extranjera, reflejándose el entramado societario y las operaciones inmobiliarias a través de intermediarios, dando cuenta también de la actividad económica y financiera de las sociedades requeridas, incluidos los registros societarios con accionistas.

La evolución patrimonial fue analizada a partir de la documentación relevada y allí se expone la reconstrucción y variación del patrimonio neto (bienes y deudas) de las personas requeridas al 31 de diciembre de cada año —abarcando una línea de tiempo que va desde el 31/12/2010 al 31/12/2020—, reconstrucción patrimonial que se realizó de acuerdo con los valores de incorporación al patrimonio que registran los bienes y deudas.

De dicho informe, así como del análisis del resto de la prueba colectada por la instrucción, se puede apreciar que estas operaciones no sólo serían habituales sino también organizadas y planificadas con el fin de disimular activos de origen delictivo, habiéndose establecido roles y modus operandi de las mismas y su perpetración en el tiempo, siendo sistematizado el accionar delictivo consistente en darle una apariencia legal al producto de la actividad ilícita derivada de la trata de personas con fines de explotación laboral, investigadas en las causas mencionadas párrafos arriba, así como el producto de la evasión fiscal, a través de cual los nombrados habrían obtenido

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

cuantiosas ganancias, además de disimular el origen espurio del dinero utilizado para la adquisición de los muebles e inmuebles objeto de lavado de activos.

En efecto, se ha acreditado otro de los elementos del tipo penal achacado: la “habitualidad”, lo cual agrava la conducta por el mayor contenido de injusto que surgiría de la repetición de hechos de esta naturaleza e incluso porque “...el autor del ilícito es un verdadero profesional dedicado a esta clase de conductas...” (Tazza, Alejandro; ob.cit., pág. 574).

Así, se pudo determinar que las maniobras de “lavado” se habrían llevado a cabo con cierta habitualidad y de manera organizada, conformando —al menos a partir del año 2010— un patrimonio de bienes inmuebles y muebles registrables (automotores y hasta una embarcación) originado en actividad ilícita, poniéndolos en circulación en el mercado local mediante diversos negocios jurídicos (funerarias y complejos recreativos), logrando así que adquirieran la apariencia de un origen lícito, determinándose que la dinámica propia de las operaciones aparejan situaciones difíciles de explicar por parte de los encausados, como ser las autorizaciones para conducir los vehículos en manos de las mismas personas y su radicación, inclusive en distintas jurisdicciones, la intervención en la adquisición de los inmuebles investigados, etc.

Ahora bien, en torno al agravio esgrimido por la defensa referente a la supuesta violación del principio de congruencia, ya que entiende que no se los ha intimado por la agravante que vengo analizando “habitualidad” (art. 303, inc. 2 a) CP), he de coincidir con el Fiscal General en cuanto a que no puede tener acogida favorable, pues entiendo que se ha descripto acabadamente el hecho, el período investigado, las maniobras identificadas en relación a los inmuebles (doce maniobras), así como aquellas referente a la compra/venta de automotores (un total de trece), como también la información sobre tenencias internacionales de divisas, enrostrándoseles la prueba que sustentó la imputación, por lo cual -y siendo que en la oportunidad establecida en el art. 298 el instructor ha dado cabal cumplimiento con las formalidades previas que exige la normativa procedimental- entiendo que el agravio blandido no puede tener ~~acogida favorable, ya que se ha informado detalladamente a los imputados el hecho que~~

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

se les atribuye y las pruebas existentes en su contra y es en esa enunciación de los hechos en la cual descansa la motivación del auto de mérito (art. 18 de la CN y art. 8 de la CADH), no en la calificación legal, pues no encuentro afectación alguna al principio de congruencia, ni tampoco —claro está— al derecho de defensa en juicio.

En tal sentido, debe tenerse presente la premisa que la instrucción es una etapa provisoria, siendo en la instancia de juicio la oportunidad para cuestionar la calificación jurídica definitiva.

A mayor abundamiento, tiene dicho este Cuerpo que "...“El debido proceso presupone que se le haga conocer al imputado oportunamente y en forma detallada los hechos que constituyen la base y naturaleza de la acusación, lo cual supone que pueda contar con información suficiente para comprender los cargos y para preparar una defensa adecuada” (cita de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Mattoccia v. Italia”, 25/7/2000, considerando 59”, CSJN, “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio y asociación ilícita”, causa n° 259, voto del Dr. Belluscio)...” (CFAMDP; Registro: 10.727, del 20/09/2013, criterio reiterado en causa FMP 1841/2015/12/CA7 del 26/10/2021).

Además, no huelga recordar que la nulidad consiste en privar de eficacia un acto procesal como consecuencia de hallarse impedido de producir los efectos previstos por la ley, al alojar en alguno de sus elementos un vicio que lo desnaturaliza (D'albora, Francisco J.; “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”, Tº I, sexta edición, LexisNexis, pág. 290), por lo cual la existencia de una causal de nulidad y el consiguiente perjuicio deben ser demostrados (conf. Torres, Sergio Gabriel; “Nulidades en el Proceso Penal”, Ad-Hoc, 5ª edición, pág. 103), lo cual nos lleva al análisis del segundo de los elementos necesarios para proceder a decretar una nulidad procesal, esto es, el “perjuicio”.

En efecto, al momento de analizar los perjuicios de las supuestas nulidades en relación con sujetos procesales concretos, lo que se debe examinar es si los actos atacables generan perjuicio en las garantías de defensa en juicio, y no en la situación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

procesal, pues todo acto procesal tendiente a acreditar la culpabilidad del investigado en un proceso penal es potencialmente perjudicial para su situación procesal, pero ello no implica que se menoscaben las garantías del debido proceso, máxime si no ha demostrado las defensas de las cuales se vio privado de ejercer. Por ello, la declaración de nulidad procesal “...requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes y su declaración no procede en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de nulidad por la nulidad misma...” (Fallos: 345:1421).

Priman en estos casos los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales, por tal motivo debe mediar un interés jurídico que reparar, por lo que es inadmisibles la declaración de la nulidad por la nulidad misma, ya que la base de su declaración es la demostración indispensable de un interés jurídico concreto (ver al respecto, Navarro-Daray; “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Tº 1, Hammurabi, 5ª edición, pág. 639 y ss) y en el caso los inculcados, en función de los derechos que entienden afectados, han podido defenderse de la acusación del Ministerio Público Fiscal, no habiendo variado la plataforma fáctica, por lo cual una eventual diferente adecuación típica no implica una vulneración de la defensa en juicio.

En función de lo expuesto y referencia al agravio relativo a la atipicidad de la maniobra de lavado de activos formulado por las defensas, considero que —conforme la etapa que atraviesa el procedimiento— hay circunstancias objetivas y notorias en la actividad desarrollada que tornan inverosímiles las excusas esgrimidas.

Continuando con el análisis del caso, no huelga recordar una vez más que “...La intención y el conocimiento requerido para probar el delito de lavado de activos se puedan inferir a partir de circunstancias objetivas de hecho...”. Es decir que, como en todo proceso penal “...los hechos (ya sea los referidos a la exteriorización de la acción como los referidos a la interioridad) se acreditan por elementos objetivos



incorporados como prueba...” y no en el sentido de que “...la objetividad basta para afirmar la subjetividad...” (Virgolini, Julio - Silvestroni, Mariano; “Derecho penal tributario”, Hammurabi, 2014, pág. 282).

Por otro lado, considero que la instrucción ha ajustado su proceder al principio de legalidad y ha sido respetuosa de las garantías constitucionales de los encartados, debiendo recordarse, una vez más, la importancia de investigar esta clase de delitos, lo que ha llevado a nuestro país a asumir compromisos internacionales con la suscripción de diferentes instrumentos jurídicos de destacada importancia en el tema, como ser la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) aprobada por Ley 25.632, que de forma más amplia que la Convención de Viena obliga a los Estados a penalizar el blanqueo del producto del delito (art. 6), además de exigirles determinadas medidas preventivas y de cooperación (art. 7), entre otras cuestiones.

En igual sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Mérida, 2003), aprobada por Ley 26.097 que también impuso a los Estados firmantes medidas específicas para prevenir el blanqueo de capitales (art. 14) y tipificar el blanqueo producto del delito (art. 23) (ver en Riquert, Marcelo Alfredo –Dir- “Código Penal de la Nación. Comentado y anotado”, Tº III, Erreius, pág. 2285).

Asimismo, en el ámbito interamericano, sucedió algo similar, es decir se han suscripto convenios que tienen la misma finalidad, obligar a los Estados firmantes a adoptar medidas pertinentes contra esta clase de delitos, entre los cuales merecen mencionarse la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, 1996), aprobada por Ley 24.759 y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (Bridgetown, 2002) aprobada por Ley 26.063, como así también el “Reglamento Modelo Americano sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico de Drogas y Delitos Conexos” elaborado en 1992 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), tomando como base la Convención de Viena y algunas de las “Recomendaciones” del GAFI (Grupo de Acción Financiera), institución intergubernamental creada en 1989 con la finalidad de crear y promover políticas

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

destinadas a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ver Riquert, Marcelo Alfredo, ob.cit., “Código Penal...”, pág. 2285).

En definitiva, el accionar del Juez de grado se ha sujetado al compromiso de la normativa local e internacional, ajustándose al principio de legalidad y respetando la presunción de inocencia.

En cuanto a la reclamada aplicación de la ley penal más benigna, vinculada a las operaciones detectadas e imputadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.683, entiendo —también en coincidencia con el titular de la acción penal pública— que tampoco puede tener acogida favorable.

Para resolver este tópico, comenzaré por recordar que estamos ante un tipo penal “...complejo, alternativo, que consiste en una serie de actos que tienen como objetivo disimular el origen delictivo o procedencia ilícita de las ganancias obtenidas por la comisión ilícitos antecedentes, intentando transformar la naturaleza ilícita del provecho material que se ha obtenido del crimen previo. Por lo tanto, el delito se verá configurado en su plenitud cuando se pueda asegurar y acreditar procesalmente que determinados bienes de origen delictivo han sido efectivamente puestos en circulación en el mercado con la consecuencia posible de ser confundidos como provenientes de fuentes lícitas...” (ver mi voto en autos FMP 34579/2015/1/CA1, del 22/08/2024).

Asimismo, tengo presente que “...No debe confundirse esta clase de hechos delictivos con el delito continuado, en el cual el autor lleva a cabo varias violaciones jurídicas, por lo general sucesivas y simultáneas tendientes a un único resultado, exigiéndose por ello —entre otros indispensables requisitos- la unidad de resolución o dolo, que en principio no aparecería configurada en esta investigación criminal con los elementos probatorios hasta aquí recolectados en la causa. La más calificada doctrina —a mi juicio- para resolver esta disyuntiva, sostiene que en estos casos conviene recurrir al “verbo definidor” del delito de que se trate (ver Núñez, Ricardo, “Tratado”, II, 254). En igual sentido se pronuncia Soler (Soler, Sebastián, Tº I, Tea, 1953, p. 273 y ss.), remarcando la importancia del “verbo relevante”, advirtiendo además que deben



ser cuidadosamente distinguidos los delitos instantáneos de efectos permanentes, con aquellos verdaderos delitos permanentes “en los cuales lo que permanece no es un mero efecto del delito, sino el estado mismo de la consumación”.-De todos modos tales afirmaciones se complejizan en supuestos como en el caso del lavado de dinero, pues el tipo penal se halla configurado por una serie de conductas dispuestas de modo alternativo y en las cuales cada una de ellas es constitutiva de la modalidad delictiva de lavado o blanqueo de capitales...” (ver autos FMP 34579/2015/1/CA1, del 22/08/2024, del voto del Dr. Tazza).

En el caso particular del lavado de activos, debemos tener en cuenta que las acciones descriptas en el tipo penal culminan con la expresión “o de cualquier otro modo pusiére en circulación en el mercado” por lo cual con lo que no cabe duda que las conductas descriptas por el legislador, “...no son sino formas de “poner en circulación en el mercado” los bienes o activos de procedencia ilegítima, y siempre en la medida en que se compruebe la existencia de los restantes elementos típicos de la figura...” (ver autos FMP 34579/2015/1/CA1, del 22/08/2024, del voto del Dr. Tazza).

En el caso que nos ocupa, tengo presente que en autos se atribuye a los nombrados al menos las maniobras de “adquisición” y “administración”, con el objeto de poner en circulación en el mercado de dinero proveniente de la actividad ilícita desarrollada (la explotación laboral y la evasión tributaria) y la posterior adquisición de bienes registrables tanto en el país como en el exterior, además de la colocación de dinero en efectivo en el mercado formal (y particularmente en entidades bancarias estadounidenses).

En función de ello, sin perjuicio de la fecha de adquisición de los bienes, los mismos se mantuvieron y siguieron administrando al momento del dictado de la Ley 26.683, por lo cual el delito se vio configurado en su plenitud cuando se constató los bienes de origen delictivo fueron efectivamente puestos en circulación en el mercado con la consecuencia posible de ser confundidos como provenientes de fuentes lícitas, debiendo —bajo tales arbotantes— descartarse el agravio esgrimido por las defensas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Consecuentemente, la existencia del hecho delictuoso y la responsabilidad de los sindicados en la maniobra investigada, se encuentra corroborada con elementos de convicción suficientes, habida cuenta que se apoya en medidas de instrucción judicialmente autónomas y plenamente válidas, lo que ha permitido al juzgador construir una argumentación dentro del esquema de prueba, razonamiento, decisión motivada que hacen a la debida cimentación del objeto del proceso (arg. art. 306 del CPPN).

En definitiva, el auto cuestionado se sustenta en la valoración de los antecedentes de la causa, efectuándose la correspondiente fundamentación por lo cual se ha dado cumplimiento con lo normado en el art. 123 del CPPN, debiendo rechazarse los agravios blandidos al respecto, ya que —como se dijo— el a quo ha confrontado y valorado debidamente el plexo probatorio cargoso y eso le ha permitido fundar el temperamento incriminatorio.

Sin perjuicio de todo lo hasta aquí desarrollado, nada obsta al análisis de nuevos elementos probatorios que ameriten reiterar el examen, toda vez que —como es sabido— el auto de procesamiento no causa estado y es susceptible de ser modificado o dejado sin efecto en cualquier momento a lo largo de la instrucción, también debe remarcarse que dicha resolución de mérito no requiere una certeza apodíctica, sino que basta con la concurrencia de elementos suficientes sobre la concurrencia del delito y la intervención del imputado (conf. D’Albora, Francisco J. “Código Procesal Penal de la Nación, Anotado, Comentado y Concordado”, T. II, 7ª edición, Bs. As., Abeledo-Perrot, 2005, pág. 653), siempre en miras de habilitar la base del proceso hacia el juicio, que es la etapa en la cual se desenvolverá el debate y la confrontación con amplitud de tales cuestiones. Por ello, la estimación realizada, conforme los parámetros del art. 306 del Ritual, no es definitiva ni vinculante ya que el juez puede revocarla posteriormente y la defensa tendrá oportunidad de pronunciarse ante un requerimiento de elevación a juicio (arts. 311 y 349 del CPPN).

Por otro lado, en cuanto al monto del embargo, es criterio de esta Alzada que el mismo debe resultar suficiente para poder afrontar el pago de la indemnización civil,

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

así como otros gastos originados por la tramitación de las actuaciones, en tal entendimiento considero que los mismos se han ajustado a las previsiones del art. 518 del C.P.P.N., por lo cual debe también rechazarse el agravio intentado al respecto.

Es por tal motivo que se sostiene que la fijación del monto “...se supedita al mayor o menor grado de compromiso en las maniobras (CNPE, Sala A, JA 1995-III -256 [J 953091])...”, además de que “...debe resultar suficiente para afrontar el pago de honorarios profesionales y otros gastos originados por la tramitación del expediente (CNPE, Sala B, E.D., del 31/VII/2000, DPPC, f. 131)...” (citado por D’Albora, Francisco J.; “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”, T. II, 7ª edición, Bs.As., Abeledo-Perrot, 2005, pág. 1143).

Por otro lado, en cuanto a la caución fijada, considero que en la búsqueda de mitigar la peligrosidad procesal sin recaer en una alternativa más gravosa —téngase presente que se ha dictado a su respecto un procesamiento sin prisión preventiva— las medidas fijadas por el a quo aparecen por el momento como razonables y proporcionales a las circunstancias del caso.

Sabido es que la libertad de un imputado durante la tramitación de un proceso penal debe ser la regla y el único fundamento para la restricción a través de la prisión preventiva de tal derecho constitucional, debe buscarse en el denominado riesgo procesal, ya sea por entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga, por lo cual toda medida restrictiva que se aparte de tal motivación, carecerá de verdadera legitimidad.

Además, no puede desconocerse la vigencia del art. 210 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) de donde surge, con claridad meridiana, la regulación de las medidas de coerción y las medidas cautelares que pueden adoptarse respecto de un imputado de cualquier delito previsto en el Código Penal o leyes especiales, antes de la prisión preventiva, en el entendimiento —conforme vengo sosteniendo— de que la regla





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

vigente en todo proceso penal en trámite será la libertad del imputado, en función de la presunción de inocencia de la que goza toda persona sometida a proceso, hasta tanto sea declarada culpable (arg. arts. 18 CN, 75 inc. 22; art. 8.2 CIDH y art. 9.2 PDCyP).

En tal sentido, “...sólo cuando existan serias y fundadas presunciones surgentes de hechos objetivos o concretos indicios emanados de la causa, podrá restringirse dicha libertad, aunque no necesariamente con el encarcelamiento del imputado, sino también valorando aquellas reglas establecidas por la ley ritual, en el sentido de neutralizar debidamente los eventuales peligros procesales, como ser la aplicación de reglas de conducta, cauciones patrimoniales, retención de documentos de viaje, presentaciones periódicas al Juzgado, aplicación de dispositivos electrónicos de seguimiento o localización, o el arresto en el propio u otro domicilio del imputado, antes de llegar a disponer su alojamiento en instituto de detención, que será procedente cuando aquellas otras medidas, aplicadas en forma individual o conjunta, “no sean suficientes” para despejar la existencia de probables riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación en curso (ver art. 210 CPF)...” (CFAMDP; causa FMP 43704/2018/2/CA14, interlocutorio del 06/08/2024).

Dicho norte, considero, es el que ha adoptado el Juez a quo al momento de disponer la caución cuestionada —habiendo considerado las circunstancias especiales de la causa en función de lo establecido en los arts. 221 y 222 del CPPF— a los fines de no tornarla ilusoria, por lo cual considero que el punto cuestionado debe ser confirmado, lo que así se propone al Acuerdo.

En definitiva, “...no puede pasarse por alto que en algunos supuestos se pueden adoptar otro tipo de medidas cautelares, como son las cauciones, las prohibiciones de salida del país, entre otras, y que si bien no revisten la entidad de la mencionada en el párrafo anterior, lo cierto es que logran proporcionar un determinado grado de certeza que le alcanza al magistrado para creer que el imputado se sujetará al proceso. A lo que, se debe agregar que el examen para determinar las mismas, ya sea una caución juratoria, una personal o una real, únicamente le competará al juez que tenga a su cargo la investigación (autos “Legajo de apelación de Guerra, Miguel Ángel y Orlando,

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

Héctor Martín si inf. Ley 26.364", registrada con el N° 31014404, rta. 10/02/2014). Lógicamente, esa decisión deberá tener justificativos que resulten coherentes y que tengan en vista la situación de los sujetos a los cuales se les dispone un auto de procesamiento sin prisión preventiva, por cuanto toda resolución que se adopte alejada de tales parámetros podría tornar ilusoria la libertad ordenada en autos..." (CFAMDP; causa FMP 32006228/2013/152/CA84, interlocutorio de fecha 08/11/2022).

En cuanto al monto de la caución, también cabe destacar que las mismas ya se hicieron efectivas con los respectivos fiadores, ofreciendo cada uno un bien a embargo acompañando los títulos originales.

Finalmente, en cuanto al motivo de agravio referente al levantamiento de la prohibición de salida del país, cabe advertir que, ante un pedido concreto de un viaje al exterior, deberán ventilarse en el correspondiente incidente las razones esgrimidas, pues si bien las medidas cautelares deben dictarse, como regla, de consuno con el auto de procesamiento, las condiciones, circunstancias y urgencias pueden variar al momento en el cual se solicita el levantamiento de la misma.

Consecuentemente, el auto cuestionado se sustenta en la valoración de los antecedentes de la causa, efectuándose la correspondiente fundamentación por lo cual se ha dado cumplimiento con lo normado en el art. 123 del CPPN, debiendo rechazarse los agravios blandidos al respecto, ya que —como se dijo— el a quo ha confrontado y valorado debidamente el plexo probatorio cargoso y eso le ha permitido fundar el temperamento incriminatorio.

En función de lo expuesto en los considerandos que preceden, siendo que los jueces no están obligados a seguir todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimen conducentes para resolver la cuestión debatida (Fallos: 311:340; 322:270; 329:3373; 331:2077 entre otros), propongo al Acuerdo que se CONFIRME el resolutorio recurrido en todo cuanto fuere materia de agravios.

Tal el sentido de mi voto.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

El doctor Alejandro Osvaldo Tazza dijo:

Expuestas por mi distinguido colega las circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan su decisión, debo manifestar que he de disentir respetuosamente con la solución propuesta, a tenor de los argumentos que seguidamente se expondrán.

I) Procesamiento: Valoración preliminar.

En la presente causa se investiga a Francisco Costantino, Serafina Rocca, Juan Martín Costantino, Florencia G. Costantino, Victoria Viva y Mariela Soledad Costantino por la posible comisión de lavado de bienes y activos procedentes de la evasión impositiva surgente del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado y delitos conexos por el que fueron procesados Juan Martín y Francisco Costantino (causa 9023/13) y los nombrados junto a María Soledad Costantino por el mismo delito de trata de personas con fines de explotación laboral (causa 25502/2014).

Tales actividades ilícitas habrían generado ganancias, tanto para sus responsables como para sus familiares o allegados, como ser el caso de Serafina Rocca (esposa de Francisco Costantino), Florencia G. Costantino (hija del matrimonio), Victoria Viva (pareja de Juan Martín Costantino) y Guillermo Vitarelli (esposo de María Soledad Costantino).

El juez de la primera instancia tuvo por acreditado con el grado de presunción suficiente en esta etapa que tanto Francisco Costantino, Juan Martín Costantino y Mariela Soledad Costantino habría cometido el delito de “lavado de activos” agravado por habitualidad en calidad de coautores (arts. 303 inc. 1 y 2 “a” del Código Penal), mientras que la situación procesal de Serafina Rocca fue considerada como partícipe primaria de la misma imputación delictiva.

Los hechos presuntamente constitutivos de este delito de lavado de dinero se habrían cometido al menos entre los años 2010 hasta el día 28 de noviembre de 2015.

Vemos entonces que a Francisco, Juan Martín y María Soledad Costantino, se

le imputaría una conducta comprensiva de lo que se denomina “autolavado”, es decir,

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

maniobras delictivas tendientes a disimular el origen espurio de bienes o activos obtenidos de conductas ilícitas previas por ellos cometidas. Mientras tanto, que a Florencia Costantino y a Serafina Rocca la imputación sería la misma, aunque con distinto grado de participación. Es decir, Florencia Costantino como “coautora”, y Serafina Rocca como “partícipe primaria” del delito de lavado de activos, pero de bienes o activos provenientes de un ilícito en el que no habrían participado.

La resolución recurrida no aclara puntualmente cuáles de los verbos típicos se verían involucrados en la comisión delictiva investigada, sino que menciona que se han llevado adelante al menos alguno de los verbos típicos de la figura de lavado de activos, en particular, “disimular”, “administrar” y “poner en circulación” en el mercado, dinero proveniente de actividades ilícita, y la “adquisición” de bienes registrables tanto en el exterior como en el país, además de la colocación de dinero en efectivo en el mercado formal.

Por otro lado, se remarca la habitualidad en dicha conducta, entendiendo que para su acreditación basta que se realice la conducta básica de manera usual y regular, es decir, con repetición de actos o por hábito y no en forma esporádica o excepcional. Se considera, con cita de precedentes de la jurisdicción de San Martín, que se debe tener en cuenta y evaluarse las maniobras como integradoras de una única y continuada gestión (delito continuado).

Los cuestionamientos defensoristas y la estructura de la pieza jurídica recurrida me obligan a formular algunas precisiones previas al tratamiento de la decisión que finalmente debe adoptarse en esta etapa del proceso.

II) De la figura del lavado de activos.

En el sentido antes indicado, debo referirme a los requisitos exigidos por la figura básica del lavado de activos previsto por el art. 303 de nuestro Código Penal, puesto que la ilicitud fuera objeto de fuertes cuestionamientos doctrinarios, lo que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

necesariamente indican que la figura debe ser interpretada de modo cauteloso y restrictivo, a fin de respetar elementales principios constitucionales que amparan a toda persona sometida a proceso.

En primer lugar debe señalarse que no toda utilización de fondos o activos provenientes de un ilícito penal es constitutiva del delito de lavado de activos

En efecto, conforme la estructura que presenta el tipo penal referido, es necesario destacar que luego de una serie de acciones ejemplificativas expuestas en la norma, el art. 303 del Código Penal culmina con la expresión “o de cualquier otro modo pusiere circulación en el mercado” los bienes o activos provenientes de un ilícito, con la consecuencia posible de que el origen de los mismos adquiriera apariencia de legalidad.

Por lo tanto, no cabe duda que no cualquier conversión, transferencia, administración, venta, gravamen, adquisición o disimulación son conductas típicas, sino solo y exclusivamente en la medida en que tal acción implique una puesta en circulación en el mercado de bienes o activos de procedencia ilícita, y siempre y cuando exista la consecuencia posible de que adquieran apariencia de legalidad y el monto de aquellos superen el mínimo legal allí establecido.

En esa línea de pensamiento se ha sostenido que “el delito de lavado no se satisface con la realización de alguno de los actos jurídicos enumerados en la norma, sino que las alternativas negociales allí expresadas configuran posibles modos de puesta en circulación de bienes...procurándose así dotarlos a esos bienes de apariencia lícita” (ver “Galindo, Juan Carlos León y otros s/Procesamiento y embargo”, Cam. Crim y Correc. Fed. Sala 2, del 30-9-21, citado por Berruezo, Rafael, “Límites a la extensiva interpretación del delito de lavado de dinero”, publicado en “Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio – I”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Sta. Fe, 2022, pag. 35 y ss.).

Muy atinadamente el voto del Dr. Boico como miembro integrante de la Cámara Criminal de la Capital Federal, explica que “el autor necesita desplegar eventos



o estrategias para que esos bienes ilícitos ingresen al tráfico lícito, aunque necesita también ocultar su génesis delictiva. Entonces el tema no se sacia tan sólo con introducirlos al circuito lícito, sino hacerlo como si fueran de origen lícito, o dicho de modo contrario ocultando su procedencia ilícita. De eso se trata el lavado. Por caso, la mera adquisición de bienes con dineros malhabidos no constituye el delito de lavado, pues así no se lava nada” (ver Berruezo, Rafael, y precedente citado anteriormente).

Para esta finalidad el autor debe haber desarrollado alguna estrategia, algún acto de “camuflaje”, desplegar eventos, o aplicar un plan de “enmascaramiento” para dotar al bien de una calificación de licitud de la que antes carecía (cit por Berruezo, ídem anterior).

En definitiva, para que exista objetivamente el delito de lavado de activos, es necesario que el autor “despliegue alguna conducta orientada a alterar el origen de los bienes”, que debe materializarse con evidencias concretas que así lo demuestren (del voto del Dr. Irurzum en el fallo de la Cámara Federal de Capital Federal anteriormente citado).-

En tal sentido no debe confundirse la utilización de tales beneficios ilícitos -que a lo sumo podrán considerarse el producto o “provecho” del delito- con las complejas operaciones que definen al delito de blanqueo de capitales ilícitos, caracterizadas por la “simulación”, la “ocultación”, el “enmascaramiento” o la disimulación, orientadas subjetivamente a crear una falsa apariencia de legalidad a los fondos de origen espurio.

Se requiere pues, objetivamente, que la acción tenga aquella entidad, ya que como sostuviera en otro precedente de este Tribunal “el delito de lavado de dinero o de blanqueo de capitales consiste básicamente en la realización de una serie o entramado de conductas orientadas a “dar apariencia de legalidad” a dinero o bienes que provienen de una actividad delictiva precedente.

Si bien no se reclama que el autor haya logrado el objetivo de “confundir” sobre la naturaleza y origen de los bienes o activos involucrados, es necesario que todas las acciones aquí previstas, para ser consideradas típicas en términos de blanqueo de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

dinero, deben tener aptitud e idoneidad suficiente como para engañar sobre su origen, o dar una falsa apariencia de legitimidad, además de haber sido emprendidas volitivamente por el autor procurando obtener dicho propósito.

Este último aspecto, de carácter subjetivo, debe estar presente en la línea de investigación, pues representa la voluntad de realizar alguna de las acciones previstas por el tipo penal inspirado en esa idea de confundir acerca del origen de los fondos, algo que es requerido incluso hasta por las Convenciones Internacionales que dan origen a esta figura penal (de “propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes”, habla la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional –Ley 25.632-, y “con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes”, refiere la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988).

Y tal como dice el fallo de la Cámara Federal porteña antes reseñado, lo que el legislador castiga es la maniobra cuya finalidad persiga apariencia de legalidad, sin interesar si se consigue dicho resultado (del voto del Dr. Boico en precedente citado).

Ambas aristas, tanto objetiva como subjetiva, deben verse reflejadas, aunque sea indiciariamente, en el curso de la investigación con evidencias concretas de su materialización, para así poder presumir fundadamente en la efectiva presencia de los gérmenes existenciales de esta ilicitud. De otro modo parecería que toda actividad vinculada con las ganancias o el producto de un delito previo es constitutiva de un supuesto de lavado de activos (ver Emlek, Pablo I. “Habrà llegado la hora de racionalizar el tipo penal de lavado de dinero?”, publ. en “Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio – I”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Sta. Fe, 2022, pag. 79).

III) Las imputaciones por lavado de dinero en el caso concreto.

Conforme lo que surge de la Instrucción de esta causa, se investigan aquí la presunta comisión de veinte siete (27) hechos diferentes posiblemente constitutivos del delito de lavado, y que conforme a tal número y repetición de conductas ilícitas

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

mereció ser agravado por la habitualidad y reiteración de su comisión (arts. 303 inc. 1 y 2 “a” del Código Penal).

Hecho 1) La adquisición y administración del inmueble Brickell Bay Drive 905 Depto. 525 de Miami (titularidad de Juan Martín Constantino, declarado como adquirido en el periodo 2011/10).

Hecho 2) La adquisición y administración del inmueble Brickell Bay Drive 905 Depto. 1204 de Miami (titularidad 50% de Juan Martín Constantino y 50% de Mariela Soledad Constantino, declarado como adquirido en el periodo 2011/04).

Hecho 3) La adquisición y administración del inmueble Brickell Bay Drive 905 Depto. 1221 de Miami (titularidad 50% de Juan Martín Constantino y 50% de Mariela Soledad Constantino, declarado como adquirido en el periodo 2011/04).

Hecho 4) La adquisición y administración del inmueble Brickell Bay Drive 999 Depto. 1606 de Miami (titularidad 50% de Francisco Constantino y 50% de Serafina Rocca, declarado como adquirido en el periodo 2011/02). Conforme información remitida por Estados Unidos este inmueble fue adquirido por la sociedad Francisco Constantino LLC, se transfirió a Francisco Constantino y Serafina Rocca el 01/06/17 y finalmente estos últimos lo cedieron a Florencia Constantino el 06/12/22, desprendiéndose así de la propiedad a favor de su hija menor al momento de encontrarse en trámite las causas FMP 9023/2013 y 25502/2014.

Hecho 5) La adquisición y administración del inmueble de Sarmiento 3367 1°C de Mar del Plata (titularidad 50% de Francisco Constantino y 50% de Serafina Rocca, declarado como adquirido en el periodo 2013/07).

Hecho 6) La adquisición y administración del inmueble ubicado en Sarmiento 3367 5°BC de Mar del Plata (titularidad de Serafina Rocca, declarado como adquirido en el periodo 2013/02).

Hecho 7) La adquisición y administración del inmueble ubicado en Jorge Newbery 5005 LT6 de Mar del Plata (titularidad de Serafina Rocca, declarado como adquirido en el periodo 2016/04).

Fecha de firma: 22/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Hecho 8) La adquisición y administración del inmueble ubicado en Rawson 2449 4ºB de Mar del Plata (titularidad de Florencia Constantino, declarado como adquirido en el periodo 2015/01).

Hecho 9) La adquisición y administración del inmueble partida 045-466861-8 Circ. 04, Sec. Z, Fracción 0085, Parcela 4. General Pueyrredón -Lote 93 del Barrio Los Pinos del Barrio Privado RUMENCO- (titularidad 50% de Mariela Constantino y 50% de Guillermo Vitarelli, adquirido el 05/01/13).

Hecho 10) La adquisición y administración del inmueble partida 045-472956-0 Sarmiento n° 3145 entre Nicolás Avellaneda y San Lorenzo. Manzana 294D, Parcela 8A. General Pueyrredón (titularidad de Mariela Soledad Constantino, adquirido el 28/08/14 01/05/14).

Hecho 11) La adquisición y administración del inmueble partida 045-472990-0 Sarmiento n° 3145 entre Nicolás Avellaneda y San Lorenzo. Manzana 294D, Parcela 8A. Subparcela R. General Pueyrredón (titularidad de Mariela Soledad Constantino, adquirido el 28/08/14 01/05/14).

Hecho 12) Por otra parte, cabe destacar el hecho de que el inmueble ubicado en calle Matheu 4295 de la ciudad Mar del Plata (maniobra 12) surge como adquirido al 100% por Francisco Constantino con fecha 11/11/1993, quien lo transfirió a Serafina Rocca también en el 100% de la titularidad con fecha febrero de 2006 conforme lo declarado por la nombrada en su acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal de la Ley 27.260. Sin embargo, Francisco Constantino declaró este inmueble como de su patrimonio ante el ente recaudador hasta la declaración jurada del período fiscal 2015, por lo que se habría desprendido de este a favor de su esposa, teniendo en curso las investigaciones de las causas N° 9083/2013 y 25502/2014.

Por lo demás, se destacan las siguientes operaciones de compra y venta de automotores:



Hecho13) Dominio KZU036 modelo Mini Cooper (titularidad de Guillermo Vitarelli, declarado como adquirido en el periodo 2016/04, vendido en fecha 7/12/18 conforme padrón de AFIP).

Hecho 14) Dominio MLK694 modelo Alfa Romeo Mito, adquirido el 25/04/13 (titularidad de Juan Martín Constantino);

Hecho 15) Dominio MNE008 modelo Audi A4, adquirido el 31/05/13 (titularidad 50% de Juan Martín Constantino y 50% de Francisco Constantino);

Hecho 16) Dominio NGM418 modelo VW Amarok, adquirido el 25/10/13 (titularidad de Juan Martín Constantino);

Hecho 17) Dominio LYW998 modelo AUDI A1 1,2 T, adquirido el 04/01/13 (titularidad de Mariela Soledad Constantino);

Hecho 18) Dominio AC485QH modelo Peugeot 5008 Allure Plus adquirido el 14/03/18 (titularidad de 50% Mariela Soledad Constantino y 50% Guillermo Vitarelli);

Hecho 19) Dominio NGM399 Modelo VW Amarok 2.0 TDI (titularidad 50% de Serafina Rocca y 50% de Francisco Constantino);

Hecho 20) Dominio AD582YF modelo VW Amarok, adquirido el 27/03/19 (titularidad de Florencia Constantino);

Hecho 21) Dominio MEM174 modelo FIAT SEDAN 3 PUERTAS 500 1,4 8V CULT, adquirido el 21/02/2013 y vendido el 14/02/2017 (titularidad de Florencia Constantino);

Hecho 22) Dominio AC229GJ Modelo Chevrolet Onix 1,4 N, adquirido el 01/03/18 (titularidad de Victoria Viva);

Hecho 23) Dominio GYF229 Modelo Renault Kangoo Exp Confort adquirido el 28/10/18 (titularidad de Victoria Viva);

Hecho 24) Dominio A050RLD Modelo Zanella Styler 150, adquirido el 26/09/17 (titularidad de Victoria Viva);

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Hecho 25) Dominio OKA186 modelo VW Saveiro Cabina Simple, adquirido el 11/11/2014 y vendido el 28/02/2018 (titularidad de Victoria Viva).

Hecho 26) tenencia de USD 18.372,89 en Bank of America (50% de Juan Martín Costantino y 50% de Francisco Constantino, para el periodo 2016);

Hecho 27) tenencia de USD 151.413,37 en Bank of America (50% de Juan Martín Costantino y 50% de Francisco Constantino, para el periodo 2016).

Finalmente, expone el aquo que se tiene información sobre tenencias internacionales de divisas, no pudiendo descartarse de momento otras transferencias transfronterizas de dinero.

Se advierte entonces, que en los hechos o actos que son imputados a los acusados en esta instancia, los mismos estarían conformados básicamente, por “adquisición” y “administración”, sea de inmuebles o muebles registrables, en el país o en el extranjero.

Un párrafo en particular merece la mención de la “adquisición” de bienes o activos como conducta constitutiva de este delito, dado que a la fecha en que se produjeron los hechos investigados (entre 2010 y 2015), tal acción delictiva no estaba prevista como configurativa de esta ilicitud, ya que fue introducida por el legislador argentino recién en el año 2024. Ante tales circunstancias no es legítimo imputar a los sindicados una maniobra de tal naturaleza pues ello implicaría violentar el principio de irretroactividad de la ley penal, y en este caso, en perjuicio del imputado.

Consecuentemente, quedaría analizar si las maniobras investigadas pueden llegar a ser configurativas del delito imputado, ya sea tanto por la acción de “administrar” esos bienes, o por alguna de las otras conductas constitutivas de la infracción que representen una puesta circulación en el mercado, tanto de bienes o activos ilícitos, con la consecuencia posible de obtener apariencia de legalidad.

a) La administración como forma comisiva del delito de lavado de activos.



En primer término, debemos interpretar adecuadamente en qué consiste la acción de “administrar” bienes o activos, como modo de intentar conseguir otorgar apariencia de legalidad a bienes de origen ilícito.

La “administración” a la que alude el tipo penal del blanqueo de capitales debe referirse inexorablemente a una administración que tenga por objeto hacer aparentar que los mismos son producto de una actividad lícita o legítima.

La simple adquisición, o el mero uso o disfrute de una cosa no puede ser entendido como modo de “administrar”. Los actos de conservación o mantenimiento del bien, o los relacionados con el pago de impuestos o refacciones en la propiedad, u otros similares, no son representativos de la conducta de “administrar” si no van acompañados de otras maniobras o artilugios que pretendan hacer aparecer dicho bien como producto de una actividad lícita. Además de ello, es necesario, primordialmente, que impliquen una puesta en circulación en el mercado de capitales, es decir, que esos actos de administración tengan entidad suficiente como para que esos bienes o activos ingresen al circuito con aquella apariencia de legalidad. La simple adquisición o compra de tales objetos carece de aquellas exigencias típicas en tanto no se ha acreditado debidamente en la causa que hayan importado maniobras concretas que indiquen la puesta en circulación y que tengan capacidad bastante como para dar apariencia de legalidad disimulando su origen ilegítimo.

Por tanto, para ser considerado un hecho como “administración” que configura el tipo de lavado de activos, los actos deben ser analizados en tanto se realizan para establecer o para mantener un estado de confusión o incertidumbre sobre el origen de estos bienes, de modo tal que se contribuye así, a la finalidad procurado por el autor.

No parece, por el momento y con las constancias reunidas hasta el presente en esta causa, que hayan existido actos de “administración” que conlleven esa entidad y requisitos que el tipo penal exige. Mucho más aún cuando la titularidad del dominio se encuentra a nombre de los propios imputados.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Y más allá de la controvertida constitucionalidad de la figura del “autolavado”, que no fue esgrimida en esta causa, advierto que no se explica de que manera se habrían producido los actos considerados de administración, no bastando la simple tenencia a lo largo del tiempo como para deducir que de ello se produjo una administración en el sentido típico que cabe otorgar a esta forma comisiva.

Por el contrario, los supuestos indicados en el pronunciamiento recurrido se acercan más a una simple adquisición de viviendas en el exterior y en el país, que -como hemos dicho- por sí solo no configurarían una acción propia del delito de lavado de dinero. Menos aún cuando no ha quedado debidamente explicado cuáles son las maniobras que los imputados habrían realizado con la finalidad de ocultar o disimular el origen de tales bienes o activos, o de qué modo la supuesta administración de aquellos habría tornado con la entidad suficiente, la posible confusión patrimonial propia de esta figura penal en torno a la ilicitud de su origen.

Es por ello que a mi juicio la decisión debe ser revocada, ya que no se aclara contenido, naturaleza o modalidad de maniobras de administración con capacidad suficiente como para intentar lograr el objetivo de hacer aparecer como lícitos aquellos bienes o activos que provendrían de la actividad ilícita que se les reprocha en las causas penales en trámite.

b) De las demás acciones previstas por la figura penal de lavado de activos.

Iguales apreciaciones a las anteriores deben formularse respecto de las conductas típicas mencionadas por el tipo penal de lavado de activos, ya que la resolución no indica con la precisión y el debido rigor necesarios, cuáles serían las maniobras de convertir, transferir, vender, gravar, o de otra característica que haya tendido al propósito de poner en circulación de algún modo tales bienes o activos, que a su vez tuviera la consecuencia posible de aparentar licitud a esos fondos presuntamente provenientes de un delito previo.

En tal sentido, deberá acreditarse con el grado de probabilidad que exige esta instancia que los intervinientes hayan desplegado maniobra de ocultamiento del origen

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

de los fondos utilizados, o hayan empleado subterfugios o utilizado artilugios tendientes a disimular la procedencia aparentemente ilícita de los activos involucrados; que los mismos se hayan introducido efectivamente en el mercado, y que hayan obrado con aquella finalidad de darle a tales bienes una apariencia de licitud a través de acciones idóneas y capaces de lograr tal objetivo.

Es cierto que nuestro tipo penal no exige el efectivo resultado, sino que le basta la mera posibilidad de que suceda, pero lo que sí exige con total certeza y meridiana claridad es que esos bienes o activos hayan sido puestos en circulación en el mercado de capitales, bienes o servicios, con la apariencia de ser legítimos, recurriendo a algún modo de subterfugio que conlleve dicha capacidad.

Por ende, considero que la instrucción al menos deberá señalar el contexto histórico y circunstancial en que se produce la efectiva “puesta en circulación”, y explicar debidamente de qué modo eso puede llevar a la “consecuencia posible” de dar apariencia de legítimos a tales bienes o activos, amén de indicar aquellos indicios que aseguren su correspondencia con el aspecto subjetivo del tipo penal analizado.

Lo que se debe evaluar en tal aspecto es que los bienes y activos estén desconectado completamente del mero uso y goce de lo criminalmente obtenido, y constatar que se haya emprendido a una acción totalmente distinta y novedosa a la que constituiría la mera tenencia y disfrute de lo ilícitamente obtenido; y es por ello que “disfrutar del provecho económico del delito precedente requiere, para quien procura lavar activos, un acto de integración, una estrategia introductiva al sistema económico a través de un proceso más o menos sofisticado de ocultamiento de la ilicitud de origen” (Ver Berruezo, Rafael, ob. y fallo citado).

Si bien como acertadamente señala el Sr. Fiscal y el Sr. Juez, que la ausencia de ingresos lícitos justificados por parte del grupo familiar Constantino, la adquisición de inmuebles, la compra/venta de automotores, y los frecuentes viajes al exterior se presentan como indicios de una eventual configuración del delito, lo cierto es que tales indicadores no nos llevan de por sí a una presunción legal que “prima facie” pueda





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

tener por acreditado con la certeza que reclama esta etapa procesal aquella premisa reveladora de ilicitud.

En este sentido vale recordar que “es difícil sostener que un individuo pudiera “lavar” dinero al gastarlo o en la compra de productos o pago de servicios asociados en forma más o menos directa a su existencia (ver Emlek, Pablo, ob. cit., pag. 97).

Que los activos cuestionados carezcan de respaldo en actividades comerciales legítimas y lucrativas no conduce, por sí solo, a la conclusión de que se esté ante una conducta constitutiva de lavado de activos. Tal circunstancia, en todo caso, podría ser indicativa de una presunta evasión de tributos, o de otra actividad respecto de la cual la instrucción debería demostrar su eventual ilicitud.

En este sentido, advierto que la instrucción se ha limitado a calificar las maniobras observadas como actos de lavado de dinero, sin que hasta el momento, se hayan acreditado -al menos provisoriamente- los extremos objetivos y subjetivos de la figura penal en análisis, ni los pormenores circunstanciales de dichas maniobras que le otorgarían relevancia típica. Máxime si se considera que la casi totalidad de los bienes y activos señalados figuran indistintamente a nombre de los encartados, situación ante la cual no corresponde otro pronunciamiento que la declaración de la falta de mérito en esta etapa.

No basta con afirmar que las distintas operaciones de compra y venta de rodados, adquisición, administración y transferencia de inmuebles o tenencia internacional de divisas, fueron realizadas con el producto de actividades ilícitas e introducidas posteriormente en el mercado mediante maniobras no justificadas por los ingresos declarados, ni por actividad económica alguna atribuible a los investigados (según las imputaciones formuladas), sino que se requiere se detalle claramente en qué consistieron esas maniobras, y de qué modo se pergeñaron con la finalidad de dar apariencia de legitimidad a los activos ilícitos. En síntesis, considero que la instrucción deberá acreditar, aunque sea mínimamente, ese entramado de operaciones o negociaciones que caracterizan a este delito, como modo de ocultar o disimular la



ilicitud de la procedencia del dinero o de activos, y que hayan tenido la capacidad suficiente como para posibilitar esa consecuencia.

Solo de ese modo, la eventual “puesta en circulación” en el mercado puede adquirir el sentido ilícito que el tipo penal requiere. En consecuencia, es insuficiente aludir genéricamente a tal puesta en circulación en el mercado -que además requeriría explicar la manera y el contexto temporal en que se produce-, si las maniobras sospechadas carecen de la capacidad exigida como para generar la consecuencia posible de hacer aparecer a esos bienes o activos como obtenidos lícitamente.

Es por todo ello que a mi juicio el pronunciamiento recurrido deviene prematuro, y por tal motivo debe ser revocado, para que una vez vuelto el expediente a la primera instancia se continúe la investigación de acuerdo a las pautas y parámetros antes señalados.

IV) Del agravante por habitualidad y el principio de congruencia.

En torno a este punto, la defensa de la encartada Mariela Constantino, plantea su primer crítica al auto de procesamiento sosteniendo que sorprendentemente el delito de lavado de activos endilgado a su defendida se vio agravado por ser realizado con habitualidad (inc. 2 a del art. 303), indicando que su defendida jamás se pudo defender de dicha circunstancia fáctica de agravación de calificación, ni ofrecer pruebas tendientes a refutar esta imputación, generando -a su criterio- una situación de indefensión innegable que deriva en un pronunciamiento parcialmente nulo.

Ante dicho planteo se analizaron exhaustivamente las actas de defensa de los procesados (art. 294 CPPN), observándose que ninguno de los imputados ha sido intimado por las previsiones del inc. 2.a. del art. 303 del C.P., es decir, por haber sido cometido el hecho con habitualidad.

Ahora bien, analizado el caso, considero que el auto recurrido habrá de anularse parcialmente por cuanto en el sub examine se verifica que el procesamiento decretado le otorga significancia agravante a la figura básica por el cual fueron procesados, sin que fueran informadas en los respectivos actos de defensa.

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1ª INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

De la simple lectura del decisorio que se cuestiona se puede inferir, válidamente, que el juez de grado agrava las conductas de los encartados por “haberse cometido con habitualidad”, omitiendo brindarles a los encartados la posibilidad de conocer previamente a ese decreto las razones por las cuales arribo a tal decisión.

Cabe destacar que si para el juez de grado existieron motivos para agravar el tipo básico endilgado, se torna quimérica la posibilidad de construir una decisión sin que la parte conozca con anterioridad las bases sobre las que se sustenta esa nueva imputación. Lo que la ley concede, en definitiva, es la facultad del imputado de conocer los hechos que se le recriminan con el fin de brindar los descargos que entienda pertinentes, posibilitando también a su defensor alegar ad eventum y sobre el punto. De allí, que un procedimiento que se articule soslayando las pautas exegéticas que rigen la materia aleja de un modo serio y razonable la posibilidad de realizar un ejercicio eficaz de los derechos en juego.

En el caso concreto, si el Juez necesitaba, ampliar la declaración indagatoria en razón de este agravante así debió hacerlo, pero nunca pudo dictar un procesamiento que lo contenga, sin ofrecer previamente oportunidad de defenderse sobre tal circunstancia.

Digamos entonces, que de las inferencias metodológicas que se desarrollan, se colige que el magistrado ha incurrido en una omisión gravitante al procesar a los encartados bajo una figura penal agravada que previamente no fue informada.

Ello, claro está, no satisface mínimamente el deber de informar detalladamente el hecho asignado de manera previa al concluir en un temperamento inculcante en los términos y requisitos plasmados en el art. 306 y cctes. del CPPN.

Nótese que el propio art. 307 del C.P.P.N. sanciona expresamente con la nulidad el dictado del “...procesamiento del imputado sin habersele recibido indagatoria, o sin que conste su negativa a declarar...” (SIC). Asimismo, el inciso 3ro. del art. 167 del C.P.P.N., impone la misma sanción a la inobservancia de las



disposiciones concernientes "...a la intervención... del imputado, en los casos y formas que la ley establece", vinculándose ello con los casos en los que la ley garantiza la participación personal del encartado en el procedimiento.

Se vislumbra entonces la configuración de un vicio sustancial que afecta garantías constitucionales de fuerte impacto en el desenvolvimiento de un armonioso proceso penal, y esto principalmente por cuanto se advierten falencias procedimentales en detrimento de los imputados.

Justiprecio así, que en el sub lite se evidencian vicios u omisiones que conllevan a la invalidez parcial del procesamiento cuestionado, pues se trasluce la afectación de los principios constitucionales argüidos por la defensa en el líbello recursivo articulado (Cfr. C.S.J.N., B 66 XXXIV, "Bianchi, Guillermo O." rta: 27/06/2002).

Por todo ello, entiendo que en este punto corresponde anular parcialmente el pronunciamiento recurrido el que, por su incongruencia, adolece de nulidad absoluta, fundamentalmente en razón de la estrecha vinculación que ese tópico -el de la congruencia- tiene con el derecho de defensa en juicio y la debida intervención del imputado en el proceso (art. 18 de la Constitución Nacional).

En razón a la decisión que aquí se propone en este aspecto, no corresponde abocarse al resto de las argumentaciones que ponen en crisis el agravante por habitualidad. En tal sentido solo podré recomendar a la instrucción que no deberá confundirse la naturaleza del llamado "delito continuado" como creación pretoriana (en donde hay unidad de resolución o dolo), de aquellos otros delitos de carácter permanente o continuo, en los cuales el estado de ilicitud se mantiene por la voluntad de su autor.

Ahora bien, si el legislador ha considerado como un agravante la habitualidad en la comisión de tales hechos, es porque habría entendido que la figura básica no era constitutiva de lo que se conoce con el nombre de delito permanente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Lógicamente lo permanente es incompatible con la habitualidad. No podría haber habitualidad en un delito permanente. En tal aspecto coincido con Zorzuelo Suárez cuando afirma que “habitualidad y delito continuado resultan incompatibles y excluyentes entre sí” (Zorzuelo Suárez, Santiago, “Delitos contra el orden económico y financiero – III, Rubinzal–Culzoni, 2016, pag. 202).

Siendo así, configuraría un contrasentido o un razonamiento irracional considerar que cuando un suceso delictivo referido a un delito permanente (continuo) -en un mismo contexto de unidad de conducta- pueda ser agravado por habitualidad en su comisión, puesto que ello implicaría castigar penalmente al autor del hecho dos o más veces por la misma conducta.

Únicamente la habitualidad como agravante podría tener sentido si la figura básica es constitutiva de un hecho ilícito considerado como delito instantáneo y perfectamente completo al momento de su comisión. Su repetición en distintas oportunidades ahora sí podría dar lugar a la habitualidad reclamada por la circunstancia agravante.

Para arribar a tal afirmación deberían describirse los hechos o actos perpetrados por los imputados como materializaciones completas en su integridad en un contexto temporal determinado, y a partir de allí considerar su repetición como modalidad similar al concurso real de delitos.

De ser así, deberá la instrucción analizar si alguno de esos hechos, por la fecha de comisión, quedaría atrapado por la normativa vigente a la fecha y si eventualmente se dan aquellas circunstancias objetivas que reclama el instituto de la prescripción de la acción penal (arts. 62 y sgtes del Código Penal). Caso contrario, de valorar las acciones realizadas como un supuesto de delito continuado, en la medida en que se cumplan las exigencias que la doctrina entiende aplicables al caso, el agravante por habitualidad carecería de operatividad legal.

Por supuesto que todo ello deberá elaborarse respecto de las conductas atribuidas a cada uno de los imputados, a su grado de participación en ellas, y

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139

atendiendo fundamentalmente a las particularidades referidas ya a supuestos de “autolavado” o de blanqueo de capitales de terceros por hechos ilícitos en los que no hubiesen participado.

En virtud a todo lo expuesto, propongo al Acuerdo de esta Alzada:

I) Declarar la nulidad parcial de auto de procesamiento recurrido en tanto considera aplicable el agravante de habitualidad en el delito de lavado de activos que se imputa a los encartados.

II) Revocar el auto recurrido y DECLARAR LA FALTA DE MERITO para procesar como sobreseer a los acusados en este legajo y devolver las actuaciones a la instrucción para la profundización de la investigación en curso, para lo cual deberá tenerse en consideración los alcances expuestos en los apartados anteriores.

Tal es mi voto.

El doctor Bernardo Bibel dijo:

Que de acuerdo con las consideraciones fácticas y jurídicas desarrolladas en el voto que antecede, adhiero a la solución jurídica propuesta por el doctor Alejandro Osvaldo Tazza, proponiendo al acuerdo declarar la falta de mérito para procesar como para sobreseer a los acusados y la nulidad parcial del procesamiento dictado, con el objetivo de que se profundice la investigación de acuerdo a las consideraciones expuestas.

Tal es mi voto.

En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal **RESUELVE:**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

I) DECLARAR la nulidad parcial de auto de procesamiento del 02 de diciembre de 2024 en tanto considera aplicable el agravante de habitualidad en el delito de lavado de activos que se imputa a los encartados.

II) HACER LUGAR a los recursos de apelación, revocar el auto del 02 de diciembre de 2024 y **DECLARAR LA FALTA DE MERITO** para procesar como sobreseer a los acusados en este legajo y devolver las actuaciones a la instrucción para la profundización de la investigación en curso, para lo cual deberá tenerse en consideración los alcances expuestos en los apartados anteriores.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUELVA.

Fecha de firma: 20/10/2025

Alta en sistema: 22/10/2025

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: BERNARDO DANIEL BIBEL, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: RAFAEL OSCAR JULIAN, SECRETARIO DE CAMARA



#39557150#474687135#20251020100956139